

Civiles y Militares: Negociando en la Nicaragua Post-Revolución Sandinista

Margarita Castillo Villarreal

EN SOCIEDADES en transición democrática, al igual, que en sociedades con democracias estables, las autoridades civiles y el ejército han de ser considerados actores sociales que se involucran en conflicto y en su resolución dentro de la estructura del Estado. La interacción cívico-militar está gobernada por la autoridad que resulta de la estructura normativa que pesa sobre la institución militar-normativa que le subordina a las autoridades civiles legítimamente constituidas. Pese a lo anterior, el encuentro civil-militar es de hecho, también, una ecuación de poder. Desde esta lógica, el conflicto en tanto rasgo inherente a la interacción cívico-militar conlleva a civiles y militares al uso de la negociación. En privado, los civiles y militares usan la negociación y diversos medios de persuasión como procedimientos para influenciar en el proceso de definición de leyes y políticas en el área de defensa.

El enfoque de la negociación y la concepción de las fuerzas armadas y las autoridades civiles como actores sociales son aspectos relevantes para la comprensión de cómo se ha definido el encuentro cívico-militar en la Nicaragua post-Revolución Sandinista. Nicaragua representa un caso donde la interacción entre las autoridades civiles y militares se ha configurado a partir de la negociación y en donde ésta ha contribuido, no sólo, a garantizar la estabilidad de la institución militar, pero también, a sentar las bases de un modelo de relación cívico-militar en armonía con la democracia.

Las páginas que siguen se centran en el análisis de las relaciones que se han estructurado entre el poder civil y militar en Nicaragua a partir de 1990. De igual forma, evalúa el proceso de profesionalización de la institución militar destacando los principales avances y retos aún por alcanzar en este sentido.

El Protocolo de Transición, el EPS y el Gobierno de la UNO

Después de casi once años en el poder, el 25 de febrero de 1990, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió las elecciones presidenciales a favor de la Sra. Violeta Barrios de Chamorro, la candidata de la Unión Nacional de Oposición (UNO). Los resultados de las votaciones planteaban una situación altamente volátil desde el punto de vista político: Un gobierno liberal debía asumir el poder y un ejército de izquierda, nacido bajo el contexto de una revolución, debía subordinarse a las nuevas autoridades civiles.¹ Nicaragua logró superar la crisis planteada por los resultados electorales, gracias a la firma de un Protocolo de Transición entre el sandinismo y representantes de la UNO. Con la firma de este acuerdo, Nicaragua logró una salida de centro a la crisis planteada por los comicios del 90.

El Protocolo de Transición representa un acuerdo explícito a través del cual el gobierno electo se compromete a respetar la integridad institucional del ejército y su estructura de mandos conforme a la Constitución y Leyes de Nicaragua, al igual que, apoyar su proceso de profesionalización.² A cambio de estas prerrogativas, el EPS dejaría de ser un ejército partidista transformándose en un ejército profesional que aceptaría la autoridad del nuevo gobierno electo. Convirtiéndose, con ello, en el principal garante de su estabilidad.

Como producto de los Acuerdos de Transición, la Sra. Chamorro mantuvo en su cargo al General Humberto Ortega, quien estuviera a mando del ejército durante los casi once años de Revolución Sandinista, como máxima autoridad dentro del EPS. Esta decisión no contó con el beneplácito de sectores de derecha del país y del gobierno norteamericano, quienes veían la continuidad del General

Ortega como uno de los principales obstáculos al proceso de modernización del ejército y para la consolidación de la democracia en Nicaragua. De esta manera, la permanencia del General Ortega dentro de las filas del EPS se constituyó en uno de los principales temas de debate nacional alrededor de los cuales las principales fuerzas sociales y políticas del país mantuvieron posiciones encontradas.³

La continuidad del General Ortega dentro del EPS alentaba, entonces, la disputa alrededor del ejército, especialmente, porque ponía en duda la ruptura del antiguo vínculo partidario que había existido entre el EPS y el FSLN durante los años de la Revolución Sandinista. De igual forma, este fenómeno hacía muy difícil la asimilación del EPS como una institución nacional ante los diferentes actores sociales que conformaban la sociedad nicaragüense. Luis Carrión, miembro de la Dirección Nacional del FSLN, reflexionó acerca de la difícil situación que enfrentaba el EPS de la siguiente manera:

[Durante la Revolución] a nivel de la estructura de poder había una sola mezcla de lo civil y de lo militar. El ejército ejerció una cuota de poder político que iba más allá del campo estrictamente militar... Creo que [eso] fue muy dañino para las relaciones del ejército con un enorme sector de la sociedad nicaragüense porque se fusionaba con los civiles sandinistas, se divorciaba necesariamente de todo el resto de la sociedad que no era sandinista y que tenía opciones políticas distintas al sandinismo. Eso hizo difícil la asimilación del ejército como institución nacional.⁴

La prolongación del General Ortega en su cargo como jefe del EPS conllevaba a identificar al ejército como institución corporativa no sólo con el sandinismo, pero también, con la persona del General. Los obstáculos que esta situación representaba para la profesionalización del EPS fueron expresados por el periodista Carlos Fernando Chamorro (1994) de la siguiente forma:

Yo tengo la certeza de que esa fue una actuación importante de Humberto Ortega. Ortega despartidizó al ejército en el sentido real de la palabra. Si Humberto lo hizo no creo que lo hizo por altruismo político sino por interés personal. El sacó al ejército de la matriz partidaria subordinándolo a una matriz definitivamente institucional. No obstante, sometida a su liderazgo personal y a su liderazgo político.⁵

La continuidad del General Ortega dentro de la institución militar era un fenómeno que reflejaba, entonces, las debilidades de un proceso de modernización militar aún inconcluso. El retiro del General Ortega constituirá, por tanto, un paso fundamental en la profesionalización de las fuerzas armadas en Nicaragua.

La Crisis del 2 de Septiembre de 1993

A pesar que la Sra. Chamorro fue consecuente con su compromiso de defender la integridad institucional del

EPS, para su gobierno siempre fue una necesidad política deshacerse del General Humberto Ortega. La oposición por parte del gobierno norteamericano y de la derecha nicaragüense era el costo que estaba pagando por dicha decisión política. Ante las presiones externas e internas con relación a la destitución del General Ortega como Jefe del EPS, la Sra. Chamorro siempre alegó que la permanencia de éste dentro del ejército era transitoria y que el general se retiraría de las filas castrenses cuando ella lo considera oportuno. Ante estos señalamientos, el jefe del ejército se caracterizó por cuestionar la facultad de la Presidente de destituirlo de su cargo. De esta manera, Ortega se arrogaba el derecho de expresar públicamente que sería él quien tomaría la decisión a este respecto.

Durante los primeros años de gobierno de la UNO, las contradicciones entre las autoridades civiles y militares con relación al General Ortega no pasaron más allá de simples choques verbales entre la Presidente y el Jefe del Ejército. El dos de septiembre de 1993 se produjo, sin embargo, una crisis entre el Ejecutivo y el EPS que afectó las bases del modelo político que se instauró en Nicaragua a partir de la firma de los Acuerdos de Transición. En esa ocasión, fecha en que se celebra en Nicaragua el día del ejército, la Presidente de la República anunció de forma unilateral y sin previo acuerdo con el EPS su voluntad de pasar a retiro al General Ortega en 1994.

La manera en que la Presidente de la República comunicó su decisión con relación al retiro del General Ortega produjo una confrontación entre representantes del FSLN, el EPS y el Ejecutivo. Al concluir el acto de celebración del día del ejército se dio un enfrentamiento verbal entre el ex-presidente Daniel Ortega y la Presidente Chamorro: “Vos no sos la dueña de Nicaragua” afirmó Ortega. “Soy la Presidente y a mi nadie me levanta la voz” respondió Chamorro. Al mismo tiempo, el Mayor General Joaquín Cuadra y el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, sostienen otro choque: “Te vendiste a los gringos”, señaló Cuadra. “Yo no sabía nada de esto” señaló Lacayo.⁶

La reacción del EPS no se hizo esperar. El Estado Mayor del EPS emitió inmediatamente un comunicado en el que señaló que el retiro del General Ortega no dependía del deseo de la Presidente sino de lo que establecía la Ley de Organización Militar vigente o lo que estipularía la nueva ley que precisamente acababa de remitir el EPS al Ejecutivo para que fuese aprobada por la Asamblea Nacional.⁷ En el comunicado el ejército expresó, también, el peligroso precedente que tendría para el país realizar cambios a lo interno de la institución militar como producto de presiones externas o internas.

Ante la respuesta del EPS al anuncio de la Presidente, el gobierno emitió un comunicado reafirmando lo expresado en el acto de celebración del día del ejército. En

este último, calificaba de “irrespetuoso” el comentario de Daniel Ortega y de “reclamo inoportuno” el que hiciera la institución militar.

Lo ocurrido el dos de septiembre de 1993 no fue un simple cruce de palabras entre el ejército y el Poder Ejecutivo. Lo sucedido era expresión de una crisis en la alianza que hasta esa fecha se había tejido entre el EPS y el grupo Chamorro. Las bases del modelo político instaurado luego del triunfo electoral de la Presidente Chamorro llegaban a su fin.

A partir de la crisis del 2 de septiembre de 1993, el EPS vivirá momentos de gran inestabilidad y ansiedad a razón de las amenazas que para su permanencia como institución representaba la coyuntura política que se vivía

La manera en que la Presidente de la República comunicó su decisión con relación al retiro del General Ortega produjo una confrontación entre representantes del FSLN, el EPS y el Ejecutivo. Al concluir el acto de celebración del día del ejército se dio un enfrentamiento verbal entre el ex-presidente Daniel Ortega y la Presidente Chamorro: “Vos no sos la dueña de Nicaragua” afirmó Ortega. “Soy la Presidente y a mi nadie me levanta la voz” respondió Chamorro.

en Nicaragua. De esta manera, el EPS define como tarea prioritaria garantizar no sólo su sobrevivencia institucional, pero también, su permanente estabilidad dentro del Estado nicaragüense. El empleo de la negociación dentro de los marcos del sistema democrático fue el mecanismo a utilizar por la institución militar para solventar la crisis en la que ésta se encontraba inmersa.

El Código Militar, el Retiro del General Ortega y la Profesionalización del Ejército

La decisión tomada por la Señora Chamorro en cuanto al retiro del General Ortega llevó al Poder Ejecutivo y al ejército a una confrontación política que colocó a Nicaragua en una situación en la que todos los logros alcanzados a la fecha en materia de la consolidación de la paz en el país pudieron ser revertidos si el ejército hubiese hecho uso de la violencia. La crisis fue resuelta dentro del marco de la negociación y el compromiso. Se acordaron el retiro del Jefe del Ejército y la aprobación de un código militar luego de negociaciones entre las autoridades civiles y militares. Esta idea fue expresada por el Coronel Wheelock (1994) de la siguiente manera:

Las fuerzas armadas hicieron una propuesta al

Ejecutivo. El Ejecutivo hizo una contrapropuesta que era muy diferente a la propuesta del ejército. Por dos años estuvimos trabajando en esa propuesta hasta que, finalmente, la propuesta del ejército fue aceptada y fue remitida por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Hubo ciertamente una negociación pero creo que fue una negociación a favor de todos los nicaragüenses porque la razón prevaleció.⁸

El Código Militar viene a brindar al ejército su completa estabilidad institucional, a la vez que, ratifica su naturaleza no partidaria y su carácter nacional. Textualmente en su artículo primero establece:

El Ejército de Nicaragua, que en lo sucesivo de este Código se llamará simplemente “El Ejército”, es el único cuerpo militar armado reconocido legalmente en el territorio nicaragüense. El Ejército se regirá en estricto apego a la Constitución Política y a las Leyes a las que debe guardar respeto y obediencia: igualmente a los convenios y tratados internacionales ratificados por Nicaragua en materia de derechos humanos. Los miembros del Ejército no podrán realizar proselitismo político partidario ni dentro ni fuera de la institución ni desempeñar cargos públicos de carácter civil.⁹

La actual Constitución Política de Nicaragua promulgada en 1995, que resultara del proceso de reformas que sufriera la Constitución de 1987, solidifica, aún más, la estabilidad del ejército. En cuanto a la institución militar establece:

Artículo 92 - El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial.

Artículo 93 - El Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante.

Artículo 95 - El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que le guardará respeto y obediencia.¹⁰

La aprobación del código militar y las reformas a la Constitución de 1995, le brindan al ejército la estabilidad por la que había estado sediento. La ansiedad que caracterizó al ejército en años anteriores dio lugar a una actitud de mayor seguridad, relajamiento y auto-confianza. Tras la aprobación del código en 1994, el ejército logra su institucionalización definitiva como las únicas fuerzas armadas de la Nación. De esta manera, el EN logra garantizar su legitimidad y permanente estabilidad institucional dentro de los marcos del sistema democrático.

El relevo del General Humberto Ortega por el General Joaquín Cuadra, ocurrido el 21 de febrero de 1995, constituye uno de los logros más importantes alcanzados en cuanto a la modernización de las fuerzas armadas en Nicaragua. Lo anterior, no sólo porque con ello se logra la democratización interna de la institución militar y afianzar la consolidación de la democracia en el país, pero



Departamento de Defensa

En un desfile militar en Managua, Nicaragua, en marzo de 1985 el entonces Ejército Sandinista muestra una de sus 70 piezas de artillería de largo alcance.

también, porque con esta medida se crea una ruptura definitiva con los vínculos partidarios que el ejército tuviera con el FSLN. Este proceso se afianza con el código militar, en tanto, las fuerzas armadas, anteriormente referidas como Ejército Popular Sandinista (EPS) pasan a denominarse Ejército de Nicaragua (EN).

Valorando el proceso de despartidización, el actual Presidente de la República, ingeniero Enrique Bolaños señaló en el discurso que pronunciara el 2 de Septiembre del 2002 durante el acto de celebración del XXIII aniversario de la fundación de la institución militar:

A pesar de su origen partidario, durante estos doce años, el actual Ejército de Nicaragua comprendió la importancia de servir a la Nación, por encima de una persona, familia o partido político.¹¹

En el año 2000, según lo dispuesto en Código militar, el General Joaquín Cuadra fue, pacíficamente, relevado de su cargo por el General Javier Carrión. Lo anterior, demuestra el apego del EN a la Constitución y las Leyes de la República y su compromiso de moverse dentro del marco de los principios democráticos.

La Autonomía Institucional del Ejército de Nicaragua

Si bien el código militar subordina al Ejército a la autoridad civil representada por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de la Nación, éste obliga al Presidente a nombrar al Comandante en Jefe del Ejército sobre la base de la propuesta que le presente el Consejo Militar.

Lo anterior, limita la autoridad presidencial, al tiempo que, le da márgenes de autonomía a la institución militar en tanto ésta puede, prácticamente, darse a sí misma sus propias autoridades. Si bien lo anterior es cierto, cabe destacar que de no ser así, se correría el riesgo que el Presidente nombrara al Jefe del Ejército por afinidad política o interés personal—fenómeno que mermaría su nombramiento sobre la base de criterios objetivos, tales como, la antigüedad y calificación profesional. Esta situación es la que prevalece en el nombramiento del Comisionado General de la Policía Nacional (PN). En este caso, el Consejo de Comandantes presenta una propuesta al Presidente quien tiene la discrecionalidad de cambiarlo sin tener que enmarcar su decisión a un marco jurídico similar al código militar. Posiblemente, cuando se tenga una Nicaragua más estable (social, política y económicamente), el ejército esté dispuesto a ceder un poco más de su autonomía.

En 1998, cuatro años después de la promulgación del código militar, fue emitida la Ley 290—Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. La promulgación de la Ley 290 creó discrepancias jurídicas con el Código Militar en torno a cual entidad civil debe subordinarse el EN: si al Ministerio de Defensa o a la Presidencia de la República. El EN se apega al Código Militar, el cual les permite una comunicación directa con el Presidente en su calidad de autoridad máxima de las fuerzas armadas. El Ministerio de Defensa, por su parte, ha alegado la supremacía de la Ley 290 la cual subordina al EN a dicho ministerio.¹²

A pesar de los contrasentidos que existen en el cuerpo jurídico que rige al ejército y las contradicciones que esto crea, el ingeniero Enrique Bolaños, actual Presidente de la República, declaró públicamente que durante su administración no habrá reformas al código militar. El Presidente señaló que esta sería una tarea para los próximos gobiernos que le sucedan. El actual jefe del Ejército, General Javier Carrión, por su parte, concordó con el Presidente en cuanto a considerar que la coyuntura actual no es la mejor para realizar una reforma al código militar.¹³

Tanto el Presidente de la República como el Comandante en Jefe del Ejército están conformes con la situación actual, la que les permite a ambos, mantener una comunicación directa. La decisión del Presidente obedece, muy probablemente, a la predilección por un

Valorando el proceso de despartidización, el actual Presidente de la República, ingeniero Enrique Bolaños señaló en el discurso que pronunciara el 2 de Septiembre del 2002 durante el acto de celebración del XXIII aniversario de la fundación de la institución militar: A pesar de su origen partidario, durante estos doce años, el actual Ejército de Nicaragua comprendió la importancia de servir a la Nación, por encima de una persona, familia o partido político.

estilo de gobernar que le permite a él, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo, concentrar en sus manos el poder directo sobre la institución que controla las armas. Concentrar este poder en detrimento de otras instancias civiles de gobierno, tal como, el Ministro de Defensa. El EN, por su parte, aparentemente, prefiere lidiar con el Presidente en vez de hacerlo con intermediarios cuando se trata de la negociación y toma de decisiones en el área de defensa. Lo anterior manifiesta que aún falta mucho por hacer en cuanto a fortalecer el liderazgo civil sobre el poder militar en Nicaragua.

Las reformas al cuerpo jurídico se han dejado, entonces, para el futuro. En el mientras tanto y pese a la autonomía institucional de la que goza el EN, las relaciones entre la institución militar y el Ministerio de Defensa son cordiales y de mucha colaboración. El Ministro de Defensa, doctor José Adán Guerra, señaló durante el discurso que pronunciara durante el acto de celebración del XXIII aniversario del ejército:

Hoy quiero compartir con ustedes mi satisfacción personal y profesional, porque entre el Ejército de Nicaragua y el Ministerio de Defensa hemos iniciado,

de conformidad con la legislación vigente, un proceso de identificación de mecanismos institucionales y conciencia organizacional, para poder cumplir con las responsabilidades de la defensa nacional, en armonía con un sentido de efectiva colaboración, con madurez y un estratégico entendimiento de los roles, ventajas y oportunidades, que cada uno de nosotros aporta al propósito de la defensa de nuestro país. Esto nos permite ir forjando un modelo de relaciones civiles-militares único en Centroamérica.¹⁴

A pesar de las relaciones de colaboración existentes entre el Ministerio de Defensa y el EN, no se puede negar que el cuerpo jurídico que pesa sobre la institución militar le garantiza autonomía institucional y que ello, puede citarse como un elemento que afecta la capacidad de un liderazgo civil sobre la institución militar. No obstante lo anterior, es importante indicar que dicha autonomía ha sido un elemento importante para garantizar la propia estabilidad del cuerpo castrense en una Nicaragua donde la polarización e inestabilidad política es la regla y no la excepción. La estabilidad institucional del ejército le ha permitido, contribuir a la estabilidad nacional y a la creación de condiciones de seguridad y paz durante los trece años que lleva el proceso de transición política en Nicaragua. Lo anterior, en tanto el EN se ha caracterizado por respetar el orden constitucional al aceptar la autoridad civil representada por las tres administraciones de gobierno que han estado a cargo de los destinos de Nicaragua entre 1990-2003.

Reconversión Militar y Labores de Acción Social

El ejército en Nicaragua, al igual que el resto de fuerzas armadas en el hemisferio, se ha aprestado a redefinir sus roles y misiones dentro de la sociedad en un esfuerzo por ajustarse a la nueva coyuntura internacional caracterizada por el fin de la guerra fría y el predominio del concepto de seguridad compartida actualmente en boga en el mundo.¹⁵ Lo anterior, le ha permitido desarrollar labores de acción social, igualmente que, justificar su permanencia como institución militar en tiempos en que la existencia de los cuerpos armados es objeto de fuerte cuestionamiento.

Decara a la redefinición de sus misiones el EN participa en:

- Acciones en contra del narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional.

- Misiones de paz de Naciones Unidas.
- Acciones de remoción de minas humanitaria.
- Acciones de protección del medio ambiente, especialmente, de recursos marítimos y forestales.
- Campañas de salud preventiva como campañas de limpieza, vacunación y abatización.
- Acciones de Defensa Civil mediante la intervención ante situaciones de desastre natural que permiten



SIPA

Miembros del Comité de Resistencia Nicaragüense en julio de 1987. De izquierda a derecha: Arístides Sánchez, Adolfo Calero, Alfonso Robelo, Azucena Ferrey, Alfredo César y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

la atención humanitaria y de emergencia a los sectores de la población nicaragüense más vulnerables ante estas calamidades.

- Acciones en apoyo al Consejo Supremo Electoral (CSE) en cuanto a la protección y traslado de material y personal electoral, al igual que, en el resguardo del orden interno durante los procesos electorales acaecidos en Nicaragua.¹⁶

El involucramiento del ejército en labores de acción social no sólo tiene como meta el favorecer a los más vulnerables del pueblo nicaragüense, sino también, profundizar su nivel de aceptación entre dichos sectores populares. De igual forma, el proceso de re-definición de roles y funciones le ha permitido al EN contribuir a la consolidación del proceso democrático en el país, especialmente, a través del apoyo brindado al CSE.¹⁷ La labor social desarrollada por el EN fue valorada por el ingeniero Enrique Bolaños, actual Presidente de la República, de la siguiente manera:

Cuanto quisiéramos que en otros Poderes del Estado, en la Asamblea Nacional, en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Electoral reinara ese mismo espíritu que estamos celebrando hoy con los que se encargan de defender nuestra soberanía y de ayudar en las labores humanitarias, como la remoción de minas y la protección de los recursos naturales, convirtiéndose en un Ejército profesional, convirtiéndose en ejemplo beneficioso, al estar abrazando una conducta no deliberante en asuntos políticos... Como Jefe del Comité de Emergencia durante el huracán Mitch, pude descansar en el apoyo de estos hombres, que rescataban vidas, que volaban los helicópteros con alivio de medicinas y alimentos, que rescataban a niños y adultos de las corrientes de

*agua, que trasladaban heridos, arriesgando sus vidas por los que necesitan ayuda.*¹⁸

El EN y las Actividades de Orden Interno

El EN tiene un rostro dulce. Rostro afable asociado con su participación en acciones cívico-militares de las cuales se benefician directamente los sectores más vulnerables del pueblo nicaragüense. El EN, como toda institución armada, también, tiene un puño fuerte. Puño que utiliza para asegurar el mantenimiento del orden interno cuando la PN no puede garantizarlo por sí misma.

El inciso dos del artículo seis del Código Militar establece que el Presidente de la República tiene la facultad de ordenar al ejército a actuar en “contra grupos y organizaciones de irregulares armados en el territorio nacional cuando exceda la capacidad de las fuerzas de la policía para sofocarlo”.¹⁹ En el ejercicio de esta delicada función, el EN se ha caracterizado por su esmero en el no cometer atropellos en contra de manifestantes en protestas de carácter cívico. La fuerza de su poder se deja recaer, sin embargo, contra aquellos que protestan haciendo uso de la violencia armada atentando, con ello, contra la estabilidad y gobernabilidad del país.

A pesar que el EN logró, en el 2002, el desarme de los últimos remanes de los grupos armados (tanto de ex-contras y ex-miembros del ejército) que asolaron el norte de Nicaragua, principalmente durante los doce primeros años de la transición política, aún persisten en Nicaragua las condiciones socio-económicas que podrían hacer posible el resurgimiento de nuevos grupos en armas.²⁰

Los días se han sucedido desde aquel 25 de Febrero de

1990. Los años han, inequívocamente, pasado. No hubo, sin embargo, pese al tiempo transcurrido, un verdadero programa en apoyo a la reinserción a la vida civil dirigido hacia la población que estuvo involucrada en la guerra en la década de los ochenta. La puesta en práctica de una política en este sentido será, definitivamente, condición para una paz duradera en Nicaragua, al igual que, un gesto humanitario para con esos miles de nicaragüenses que pelearon con las armas por diferencias políticas e

El involucramiento del ejército en labores de acción social no sólo tiene como meta el favorecer a los más vulnerables del pueblo nicaragüense, sino también, profundizar su nivel de aceptación entre dichos sectores populares. De igual forma, el proceso de re-definición de roles y funciones le ha permitido al EN contribuir a la consolidación del proceso democrático en el país, especialmente, a través del apoyo brindado al CSE.

ideológicas, hoy, resueltas entre sus dirigentes nacionales y los poderes foráneos que la incitaron.²¹

Mientras las condiciones socio-económicas que padece la mayoría del pueblo nicaragüense no cambien y éstas puedan, por tanto, germinar en episodios de violencia, la función crucial del ejército no será participar en labores de acción social o en actividades de protección del medio ambiente. En la “Nicaragua tan violentamente dulce”, la principal función del EN es garantizar, en última instancia, la estabilidad nacional—fenómeno que atestigua la debilidad estructural que caracteriza al Estado nicaragüense.²²

Conclusiones

En 1990 Nicaragua enfrentaba una situación muy difícil. Una situación que pudo haber generado un estallido social de graves repercusiones si no se hubiera optado por la negociación. Una situación que de no haber sido aceptada con madurez, confianza, pragmatismo y visión de futuro, el FSLN y el EPS pudieron haber optado por la ortodoxia negándose a ceder el poder. Manteniendo, de esta manera, al país bajo los azotes de una cruenta guerra civil o bien convirtiendo a Nicaragua en otra Cuba. Un peldaño sumamente importante hacia la construcción de la democracia en Nicaragua fue puesto, entonces, en ese momento único en el que el FSLN y el EPS deciden entregar el poder; negociar la transición política y asumir el desafío de adaptarse a los retos del momento y a los venideros. Dentro de este marco, el ejército evoluciona. Se transmuta. No tanto, porque así lo hubiera querido

pero a razón de las exigencias de la realidad misma: tomando en consideración la coyuntura nacional y las circunstancias internacionales que le rodeaban. Predominó, entonces, una actitud abierta al proceso de cambio. Abrazar el pragmatismo fue, en sí mismo, un importante cambio en la mentalidad y en el accionar del ejército en Nicaragua. Para el EPS, en particular, los Acuerdos de Transición le permiten garantizar no solamente su sobrevivencia institucional, pero también, iniciar un proceso encaminado hacia el logro de su institucionalización definitiva en Nicaragua.

Hoy, se debe a la Nación. Ayer, se debía a un partido. La departidización del ejército fue un importante paso dado en aras de la modernización de la institución militar. Pese a este importante hecho, el EPS continuó, especialmente durante el liderazgo del General Ortega, siendo una entidad deliberante políticamente. No podía ser de otra manera a razón de la personalidad y ambiciones de General Ortega pero, también, dado que para el EPS su tarea primaria era el logro de su institucionalización dentro de la sociedad nicaragüense. Para el logro de dicho objetivo, el EPS tuvo que moverse y actuar en el terreno de la política. La política, de hecho, se convirtió, durante los primeros años de la transición política, en un proceso en el que las fuerzas armadas se vieron a sí mismas como jugadores de un partido de ajedrez en el que ellos ganarían la partida por su institucionalización al jugar las reglas del modelo democrático. En efecto, la más importante arma del ejército en Nicaragua desde que los Sandinistas perdieron las elecciones de 1990 no ha sido el fusil ruso AK-M pero su apego a la Constitución Política y las Leyes de Nicaragua. El marco jurídico que rige sobre el ejército ha sido su escudo y su espada. Ese escudo y esa espada aunados con el uso experto de la negociación les han dado la habilidad de navegar en medio de la gran inestabilidad política que ha prevalecido en la Nicaragua post-Revolución Sandinista. Ese escudo y esa espada son los que les ha permitido afirmar su estabilidad y desarrollo institucional.

La estabilidad alcanzada por el EN ha sido positiva para la estabilidad de la Nación. Sin una fuerza que, en última instancia, garantice el mantenimiento del orden público, Nicaragua podría ser un país ingobernable. Con ello, cambiado el rumbo que, actualmente, lleva el país en materia de consolidación democrática. El respeto que el EN ha guardado a la Constitución y a las Leyes de Nicaragua desde 1990, ha permitido que la situación socio-política del país, caracterizada por una profunda inestabilidad y polarización, no se vea agravada o llevada a un peor término a consecuencia de una posible coup d'état u otro comportamiento, igualmente, dañino a la democracia.

Si bien la actuación del EN ha sido positiva para



El Secretario de Defensa de los EE.UU., Donald Rumsfeld y el Presidente nicaragüense Enrique Bolaños en una conferencia de prensa en Managua en noviembre de 2004.

Nicaragua es lastimoso que una de las funciones centrales del ejército sea la de ser el principal garante de la estabilidad de los gobiernos que se han turnado en el poder desde 1990. Penoso es que dicha función revista crucial importancia dada la inestabilidad que caracteriza a la sociedad nicaragüense. Ha predominado, entonces, una relación de dependencia hacia el ejército para garantizar la supervivencia misma de las administraciones civiles que se han sucedido en el poder a raíz de la transición política en Nicaragua. El rol crucial del ejército se ha asentado, entonces, en una de las debilidades estructurales de la sociedad nicaragüense, en vez de, en una de sus fortalezas. Resta esperar al futuro por una más saludable Nicaragua. Por una Nicaragua de consenso y más democrática en términos de redistribución de la riqueza entre sus conciudadanos—condiciones indispensables para una paz duradera. Quizás, en esas condiciones de mayor estabilidad social el EN esté anuente a ceder mayores espacios de su autonomía.

A pesar de las limitaciones que impone el código militar a un liderazgo civil sobre el EN y la debilidad institucional del actual Ministerio de Defensa, inexorablemente, en Nicaragua se ha producido un proceso de fortalecimiento en la supervisión del poder civil sobre el poder militar. Dentro de este marco, cabe destacar que la promulgación del código militar y el retiro del General Ortega fueron hechos que contribuyeron gran-

damente al fortalecimiento del carácter profesional del ejército. Pese a las debilidades inherentes a su persona se ha de reconocer al General Ortega haber logrado transformar las columnas guerrilleras del FSLN en a una estructura militar: el EPS. El EN es, actualmente, un ejército muy joven. Un ejército, que pese a su anterior partidismo, se ha esforzado por ponerse a la altura del resto de ejércitos del área actuando con profesionalismo y sentido de patriotismo. Haber esculpido las bases del actual EN ha sido, quizás, la contribución más grande que el General Ortega ha hecho a Nicaragua. Siendo su retiro su contribución más valiosa para la estabilización y democratización interna de la institución militar, especialmente, porque ésta permitió el cambio de mando dentro del ejército. Como resultado de este proceso, el General Joaquín Cuadra y el General Javier Carrión han ocupado el cargo de Comandantes en Jefe del EN. Estos son hechos trascendentales en la historia de Nicaragua, especialmente, si recordamos que en los trescientos años de vida colonial y en los ciento ochenta y dos años de vida republicana el país estuvo sumido al dominio colonial, guerras, golpes de estado, intervenciones extranjeras, dictaduras, y a un proceso revolucionario que aunque nacionalista y popular fue desvirtuado al llevarse a la práctica. El traspaso de mando dentro del EN ha sido, sin lugar a dudas, una contribución valiosa al proceso de consolidación democrática en el país,

fundamentalmente, dada la naturaleza pacífica en la que éstos se sucedieron.

El proceso de profesionalización de las fuerzas armadas y la consolidación de un liderazgo civil sobre el poder militar en Nicaragua es, aún, un proceso inconcluso. En la medida que el país vaya avanzando por los caminos de la democracia será posible ir consolidando un modelo democrático de interacción civil-militar e ir superando las paradojas y complejidades del encuentro cívico-militar en la

Nicaragua post-revolución Sandinista. En Nicaragua, la negociación ha sido crucial en la configuración de las relaciones cívico-militares en el país y en el proceso de profesionalización de la institución militar—proceso que ha permitido el paso de un ejército partidista a un ejército apartidista, apolítico y no deliberante. La negociación podría ser un mecanismo relevante para el manejo exitoso del encuentro entre civiles y militares en otras sociedades en transición democrática. **MR**

NOTAS

1. El pueblo de Nicaragua organizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hicieron posible el triunfo revolucionario del FSLN en 1979. Como resultado de éste, la Guardia Nacional que resguardaba en el poder a la dinastía de la familia Somoza fue completamente abolida y reemplazada por una nueva estructura militar: el Ejército Popular Sandinista (EPS). El EPS nace como el brazo armado del partido que vanguardiza la Revolución Popular Sandinista (RPS): el FSLN. Dentro de esta lógica, durante el período de la Revolución Sandinista (1979-1990), no fue posible disociar al Estado, del Ejército y del Partido, en tanto, el EPS hacía parte de todo el aparato político e ideológico que existía en respaldo al proyecto revolucionario.

2. La Constitución Política promulgada en 1987 establecía que el EPS era la única institución militar del Estado nicaragüense. La Ley 75, publicada por el FSLN dos días antes de perder las elecciones frente a la UNO, establecía que las autoridades civiles no tenían facultad de nombrar al Jefe de las Fuerzas Armadas y que un Consejo Militar sería el encargado de elegirlo. De igual forma, no estipulaba los mecanismos para su nombramiento ni para su democión.

Si bien la Constitución de Nicaragua y la Ley 75 existían como cuerpos jurídicos que protegían al EPS, la Presidenta Chamorro, haciendo uso de sus facultades pudo haber promulgado un decreto presidencial en el que ordenaba el desmantelamiento del ejército, tal como lo hizo, con el Servicio Militar Patriótico (SMP) que regía en el país al momento del cambio de gobierno. Los temores en torno a esta posibilidad y las graves consecuencias que un escenario como éste pudieron haber tenido para Nicaragua, nos han de hacer ver, cuan delicados debieron ser los primeros momentos de la transición política en Nicaragua.

3. La controversia en relación con el EPS era, especialmente, delicada dado que la Contra, grupo militar que había enfrentado al EPS durante la década de los ochenta, pese a haberse oficialmente desarmado tras el triunfo electoral de la UNO, había vuelto a armarse pasando a llamarse la Re-contra. Esta situación se agravó, aún más, con la organización militar de grupos denominados Re-compas. Estos tomaron las armas luego del proceso de licenciamiento efectuado por el EPS dentro de los marcos de la transición política en Nicaragua. La situación era, aún mucho más compleja, dado que los sectores de derecha en Nicaragua se habían organizado en una agrupación denominada Movimiento Civilista. Este movimiento propugna por la desaparición del EPS como un mecanismo para lograr la plena desmilitarización de Nicaragua.

4. Luis Carrión (1994). Miembro de la Dirección Nacional del FSLN. Entrevista Personal. 1994.

5. Carlos Fernando Chamorro. Periodista nicaragüense y miembro del FSLN. Entrevista Personal. 1994

6. Revista Envío, septiembre de 1994.

7. La normativa jurídica que pesaba sobre el ejército en ese momento era la Ley 2-91. Esta fue promulgada el 8 de febrero de 1991 por la Presidente de la República. El artículo 19 facultaba a quien ocupara la Presidencia a nombrar al Comandante en Jefe del EPS. Pero, debía hacerlo a propuesta del Consejo Militar. La Ley no establecía período para el cargo de Comandante en Jefe ni causales por las que la Presidente podía destituirlo.

8. Coronel Ricardo Wheelock (1994). Jefe del Centro de Historia Militar (CHM), EN. Entrevista Personal. Junio 1994.

9. Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar. República de Nicaragua, 2 de Septiembre, 1994.

10. Constitución Política de la República de Nicaragua, 1995.

11. Memoria del Ejército de Nicaragua 2002: Nicaragua Libre de Minas. Publicación de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del EN. Página, 85.

12. La Ley 290 establece en su Artículo 20: "De conformidad con la Constitución Política, por delegación del Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, le compete a este Ministerio (Defensa), dirigir la elaboración de las políticas y planes referidos a la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial nacional y dentro de estas atribuciones, participar, coordinar y aprobar los planes y acciones del Ejército de Nicaragua".

13. La Prensa 26 de Mayo del 2002; La Prensa 8 de Junio 2002.

14. Memoria del Ejército de Nicaragua 2002: Nicaragua Libre de Minas. Publicación de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del EN. Página, 85.

15. Dentro del marco de este concepto, la soberanía ha dejado de ser un problema exclusivamente militar circunscrito a los espacios territoriales de los llamados Estados-Nacionales. La seguridad y la soberanía son, hoy día, asuntos más bien de índole económica, social, política e incluso ambiental. Los principales delitos transnacionales se encuentran en el terrorismo, el narcotráfico, tráfico ilegal de armamento, el lavado de dinero y el crimen organizado. Frente a esta nueva realidad, el papel tradicional de las fuerzas armadas pasa, naturalmente, a ser cuestionado. De esta manera, el principio que establece que la misión de las fuerzas armadas es garantizar militarmente la defensa de la soberanía nacional frente a amenazas externas ha dejado de tener validez absoluta. Pese a lo anterior, las fuerzas armadas continúan defendiendo su rol tradicional al tiempo que han asumido nuevas misiones dentro de la sociedad.

16. Cabe señalar que el EPS durante los años ochenta participó en acciones de Defensa Civil, especialmente, durante los estragos del Huracán Joan el cual azotó a Nicaragua en 1988. De igual forma, colaboró en acciones de salud preventiva y apoyó al CSE durante las elecciones de 1982 y 1984.

17. Las labores de acción social del EN se extienden más allá de las fronteras de Nicaragua. El EN participó, por ejemplo, en la ayuda humanitaria ofrecida al pueblo salvadoreño durante el terremoto ocurrido en el 2000. De igual forma, el EN es uno de los ejércitos que se encuentra, actualmente, en Irak trabajando en acciones de remoción de minas. Otro contingente brindará atención médica al pueblo iraquí.

18. Memoria del Ejército de Nicaragua 2002: Nicaragua Libre de Minas. Publicación de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del EN. Página, 85.

19. Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar. República de Nicaragua, 2 de Septiembre, 1994.

20. En Nicaragua el desempleo y el subempleo alcanzan más del 50%. La pobreza golpea a más del 70% de la población. Nicaragua es uno de los países más pobres del Hemisferio Occidental y uno de los más endeudados del mundo.

21. A pesar que desde, el punto de vista humano, el proceso de licenciamiento efectuado por el EN no fue un fenómeno halagador para los que se vieron obligados a salir de la institución éste fue muy positivo para la profesionalización del EN. Lo anterior, en tanto, le permitió al ejército depurar de la institución a todos aquellos elementos que no gozaban de prestigio. Esto ya sea porque habían cometido abusos en el contexto de la guerra en los años ochenta o bien porque vivían sumidos en el alcohol o carecían de la suficiente preparación cultural o técnica para continuar dentro de la institución militar. Los oficiales que permanecieron en el ejército fueron aquellos que tenían la capacidad y el potencial para ser miembros de un cuerpo castrense que se perfilaría como una institución profesional.

22. Frase acuñada por el célebre novelista latinoamericano Julio Cortázar. Referirse a Cortázar, Julio. 1983. *Nicaragua tan violentamente dulce*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.

Margarita Castillo Villarreal es actualmente investigadora asociada al Instituto para la Cooperación Hemisférica (WHINSEC), una entidad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el Fuerte Benning, Georgia. Previamente, fungió como una socia Rockefeller para las Humanidades en el Instituto sobre Violencia y Supervivencia de la Universidad de Virginia y, al igual que, experta visitante en el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Ha recibido becas honoríficas de parte de Fulbright, la Organización de Estados Americanos, el Instituto Caucus del Congreso Hispano entre otros.